

González, Ricardo, “Llévenselos o los ahorcamos”, *La Jornada Guerrero*, Guerrero, 11 de febrero, 2007.

**Dirección electrónica:**

<http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2007/02/11/index.php?section=sociedad&article=012n1soc>

“Llévenselos o los ahorcamos. Ahí están ya listas las cuerdas”, fue la amenaza que lanzaron pobladores católicos ante autoridades de los tres ámbitos de gobierno al momento de expulsar de esta localidad, de manera definitiva, a tres familias que profesan la fe evangélica bautista.

Y como muestra de su determinación, ya habían colocado dos sogas rojas con nudo de horca en un gran roble frente a la comisaría.

“El pueblo ya les ha dicho que no los queremos aquí”, remataron, ante la impotencia de funcionarios que desde hace dos semanas tratan de resolver ese conflicto en el que católicos acusan a evangélicos de negarse a cooperar en los trabajos comunitarios de su pueblo, pero que según autoridades seculares y eclesiásticas “no es de carácter religioso”.

A la cita de hoy, que sería el último intento por destrabar el conflicto, las autoridades llegaron con dos horas de retraso a la comisaría municipal de Chiepetlán. La gente los esperaba impaciente, así como a representantes de los organismos de derechos humanos del estado, quienes nada pudieron hacer para convencerla de no expulsar a las familias.

“Ustedes han llegado muy tarde, y el pueblo ya ha decidido conservar lo más valioso de nuestra comunidad, que son las costumbres y tradiciones de nuestros abuelos. Estos señores ya no tendrán una oportunidad más. Ya lo decidimos y queremos que se los lleven...” Con estas frases recibieron a los funcionarios de los tres ámbitos en esta comunidad, ubicada a una hora por camino de terracería y que cuenta con el antecedente de haber expulsado hace dos años al párroco local, a quien sólo recuerdan como Daniel, por su trato prepotente con los indígenas.

La tolerancia del pueblo hacia el religioso –ahora vicario de la parroquia de Huamuxtitlan, municipio vecino– se agotó cuando se rumoró que llegó a propasarse con mujeres de la localidad.

Asistieron al encuentro el enviado de la subsecretaría de población, migración y asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Villagrán Paz; el subsecretario de Asuntos Religiosos del estado, Javier Bataz Benítez; el delegado de Gobernación estatal, Jorge Rodríguez Ponce; el presidente municipal de Tlapa, Martimiano Benítez Flores; el representante de la Comisión de Derechos Humanos del estado en La Montaña, Gilberto Mora Reyes; el delegado de Asuntos Indígenas en la región, Inocencio Navarro Solano, y el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Con la comitiva llegaron también los 14 evangélicos desplazados, quienes vivían desde el 24 de diciembre en Tlapa para acompañar al patriarca de las familias detenido en la cárcel de esa ciudad, y pretendían regresar con el apoyo de las autoridades.

Aunada al rechazo a los evangelistas, la irritación por la tardanza de los funcionarios despertó entre la gente comentarios de que todos iban a salir de la reunión, menos el alcalde de Tlapa, porque no les había cumplido con ninguna obra social.

Como anfitriones estuvieron las autoridades del pueblo: el comisario de bienes comunales, Adolfo Hernández Aparicio, y el comisario municipal Guadalupe Balcázar Flores. Después de cuatro horas y media de espera empezó la asamblea. El mayor de la familia impugnada es Miguel Balcazar Ramírez, de 82 años, detenido, encarcelado y vejado por la policía por negarse a ceder un solar que el pueblo decidió otorgar a otra persona.

Junto con él, desde el año pasado, fueron expulsadas 14 personas. El párroco, Juvenal Candía Mosso, insistió en que no es un problema religioso, sino de usos y costumbres.

“Ellos –dijo, refiriéndose a los bautistas– enseñan con el temor; dicen que el fin del mundo está cerca, que no saluden a la bandera. Aquí el problema es su fanatismo, porque dicen que su religión no les permite participar en las fiestas de la comunidad, que son costumbres por generaciones”.

Luego de la presentación de las autoridades, una persona intervino para pedirle al comisario municipal, Balcazar Flores, que comunicara a las autoridades presentes que ellos ya tenían un acuerdo y que se leyera el acta de la asamblea realizada el 26 de enero pasado. El documento expresa la voluntad terminante de expulsar a los evangélicos.

“Nosotros ya decidimos que se marchen. Les deseamos suerte. Procúrenlos, pero ya no los queremos aquí; si los dejan, los colgamos”.

El alcalde de Tlapa, Martimiano Benítez, intervino diciendo que estaban no para imponer, sino para atender y resolver el problema. El subsecretario de Asuntos Religiosos expresó que tenía instrucción del gobernador de encontrar una salida convocando a la reflexión. Señaló que los usos y costumbres tienen que ser congruentes con la ley, con los derechos humanos, con la fe, pero sobre todo, con el progreso de los pueblos.

Los del pueblo respondieron: “a ustedes les pagan por estar aquí; nosotros dejamos de atender nuestros asuntos por estar esperándolos; no les podemos dar otra oportunidad porque van a traer más gente y, si así no cumplen, pues siendo más muchos menos”.

Eran las 3:20 de la tarde. El cielo se oscureció de pronto y cayó una llovizna. Los pobladores se opusieron a que las autoridades tomaran un acuerdo. Repitieron su argumento: “ya hemos decidido: se van o los colgamos... que se los lleve el pastor”.

Aludían al presidente de la asociación Confraternice, Arturo Farela Gutiérrez, representante de la iglesia evangélica bautista, quien quiso tomar la palabra. “Todos tenemos una dignidad...”, dijo. No lo dejaron continuar. “Ya no queremos que hables, llévatelos...”

Más tarde, en el palacio municipal de Tlapa, los funcionarios consideraron improcedente la determinación de la comunidad y dijeron que buscarían alternativas para llegar en 30 días a una “solución condensada”.

Y entre tanto, en Chilpancingo, el obispo de la diócesis local, Javier Alejo Zavala, resumió así la situación: “lo que pasó ahí es que las tres familias no quieren respetar los usos y costumbres que rigen en esa comunidad, pero no es un asunto religioso”.

Como anfitriones estuvieron las autoridades del pueblo: el comisario de bienes comunales, Adolfo Hernández Aparicio, y el comisario municipal Guadalupe Balcázar Flores. Después de cuatro horas y media de espera empezó la asamblea. El mayor de la familia impugnada es Miguel Balcazar Ramírez, de 82 años, detenido, encarcelado y

vejado por la policía por negarse a ceder un solar que el pueblo decidió otorgar a otra persona.

Junto con él, desde el año pasado, fueron expulsadas 14 personas. El párroco, Juvenal Candía Mosso, insistió en que no es un problema religioso, sino de usos y costumbres.

“Ellos –dijo, refiriéndose a los bautistas– enseñan con el temor; dicen que el fin del mundo está cerca, que no saluden a la bandera. Aquí el problema es su fanatismo, porque dicen que su religión no les permite participar en las fiestas de la comunidad, que son costumbres por generaciones”.

Luego de la presentación de las autoridades, una persona intervino para pedirle al comisario municipal, Balcazar Flores, que comunicara a las autoridades presentes que ellos ya tenían un acuerdo y que se leyera el acta de la asamblea realizada el 26 de enero pasado. El documento expresa la voluntad terminante de expulsar a los evangélicos.

“Nosotros ya decidimos que se marchen. Les deseamos suerte. Procúrenlos, pero ya no los queremos aquí; si los dejan, los colgamos”.

El alcalde de Tlapa, Martimiano Benítez, intervino diciendo que estaban no para imponer, sino para atender y resolver el problema. El subsecretario de Asuntos Religiosos expresó que tenía instrucción del gobernador de encontrar una salida convocando a la reflexión. Señaló que los usos y costumbres tienen que ser congruentes con la ley, con los derechos humanos, con la fe, pero sobre todo, con el progreso de los pueblos.

Los del pueblo respondieron: “a ustedes les pagan por estar aquí; nosotros dejamos de atender nuestros asuntos por estar esperándolos; no les podemos dar otra oportunidad porque van a traer más gente y, si así no cumplen, pues siendo más muchos menos”.

Eran las 3:20 de la tarde. El cielo se oscureció de pronto y cayó una llovizna. Los pobladores se opusieron a que las autoridades tomaran un acuerdo. Repitieron su argumento: “ya hemos decidido: se van o los colgamos... que se los lleve el pastor”.

Aludían al presidente de la asociación Confraternice, Arturo Farela Gutiérrez, representante de la iglesia evangélica bautista, quien quiso tomar la palabra. “Todos

tenemos una dignidad...”, dijo. No lo dejaron continuar. “Ya no queremos que hables, llévatelos...”

Más tarde, en el palacio municipal de Tlapa, los funcionarios consideraron improcedente la determinación de la comunidad y dijeron que buscarían alternativas para llegar en 30 días a una “solución condensuada”.

Y entre tanto, en Chilpancingo, el obispo de la diócesis local, Javier Alejo Zavala, resumió así la situación: “lo que pasó ahí es que las tres familias no quieren respetar los usos y costumbres que rigen en esa comunidad, pero no es un asunto religioso”.